



**REPÚBLICA DE PANAMÁ
ÓRGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PLENO**

PANAMA, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Félix Humberto Paz Moreno, apoderado judicial de Fred Harrick Eskenazi, para que se declare inconstitucional la frase "apremio corporal por el término de treinta días", contenida en el artículo 31 de la Ley N° 42 de agosto de 2012.

NORMA LEGAL ADVERTIDA DE INCONSTITUCIONAL

La frase cuya constitucionalidad se cuestiona se encuentra contenida en el numeral 1 del Artículo 31 de la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, que es del tenor siguiente:

Artículo 31. Medidas por incumplimiento. Cuando el obligado a dar alimento no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas, se ordenará, a solicitud de parte, una o varias de las siguientes medidas:

1. Apremio Corporal hasta por un término de treinta días...

TEXTO CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO

Advierte el Licenciado Félix Humberto Paz Moreno, que la frase "apremio corporal por el término de treinta días", contenida en el artículo 31 de la Ley N° 42 de agosto de 2012, vulnera el Artículo 21 de la Constitución Política de la República, que dispone lo siguiente:

ARTICULO 21. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de

acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere.

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente. Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley.

No hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles.

Señala el accionante que el artículo 21 de la Constitución Política garantiza el derecho a no ser detenido por deuda u obligaciones meramente civiles. La norma demandada de inconstitucional viola el derecho a la libertad del señor Fred Harric Eskenzani, ya que ordena el apremio corporal en función de una obligación entre personas que se subsume en el pago de la pensión de alimento del señor FRED HARRICK a favor de la Beatrice Atie.

Sostiene que nuestro ordenamiento constitucional señala que no hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles, por consiguiente el alimentista tiene la posibilidad de presentar una medida cautelar de secuestro en contra de los bienes del alimentante y, posteriormente puede instaurar un proceso ejecutivo a fin de cobrar los montos adeudados.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

Mediante Vista Fiscal N°19 de 29 de junio de 2018, emite la Procuraduría General de la Nación su criterio en relación con la constitucionalidad de la frase "apremio corporal hasta por un mes", contenida en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 42 de 2012. Estima que dicho precepto legal no infringe el artículo 21 de la Constitución Política, toda vez que su espíritu trasciende aspectos meramente civiles, al fundamentar el interés de la sociedad de proteger el derecho humano más sagrado, que es la vida, estableciendo con ello medidas de apremio corporal para garantizar el cumplimiento del derecho de alimento a favor del alimentista, por parte de quien en la Ley está obligado a sufragarlo.

Finalizó indicando el Procurador General de la Nación que se debe declarar que no es inconstitucional la frase "apremio corporal hasta por un término de 30

días", contenida en el artículo 31 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016.

FASE DE ALEGATOS

Se debe advertir que en la etapa de alegatos no se presentaron escritos de argumentación en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.

DECISIÓN DEL PLENO

Mediante el presente proceso se pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de la frase "apremio corporal por el término de treinta días", inserta en el artículo 31 de la Ley N° 42 del 7 de agosto de 2012.

En concepto del actor, la frase "apremio corporal por el término de treinta días", inserta en el artículo 31 de la Ley N° 42 del 7 de agosto de 2012, viola el artículo 21 de la Constitución Política, porque se pretende privar de libertad a su cliente por el incumplimiento del pago de la pensión a favor de Beatrice Atie, a pesar que la Carta Magna prohíbe ser detenido por deuda u obligaciones meramente civiles.

Por su parte la Procuradora General de la Nación señala que si la orden de apremio corporal fue dictada por la autoridad facultada legalmente para ello, en este caso el Juez de Paz, en atención al incumplimiento de su mandato que ordena pagar la pensión alimenticia fijada a favor del alimentista, no se puede considerar violatoria a la norma que se advierte vulnerada, ya que su fundamento jurídico se establece previamente en el artículo 31 y 73 de la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, procedimiento que, además, permite interponer recurso de apelación a la resolución que sanciona por desacato al alimentante.

Previo al análisis propio de la demanda constitucional presentada debe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia realizar algunas consideraciones previas respecto a lo que entiende nuestro ordenamiento jurídico referente a la pensión alimenticia.

Sobre este punto advierte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que mediante Ley N° 42 del 7 de agosto de 2012, se aprueba la Ley General de

Pensiones Alimenticias de la República de Panamá, que tiene como finalidad regular el derecho a recibir alimentos y la obligación de darlos.

El derecho a los alimentos está vinculado directamente con el derecho a la vida y la dignidad de la persona y que está recogido en varios tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.

La tutela alimentaria de los niños y adolescentes, se desarrolla en la Convención de Derechos del Niño y la Niña que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el derecho a la salud y a servicios ligados al tratamiento de las enfermedades, y entre ellos, a la atención sanitaria apropiada para las mujeres embarazadas. Establece la obligación de los Estados de adoptar las medidas apropiadas para combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable.

En relación a la obligación de proporcionar los alimentos la Convención de Derechos del Niño y la Niña señala que la obligación primordial de proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de los niños, en principio corresponde a los padres y otras personas responsables por ellos (dentro de sus posibilidades y medios económicos), no obstante, la Convención impone a los Estados Partes el deber de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia.

Sobre este tema el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña expresa:

Artículo 27.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
- 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.**
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

Es importante también señalar que la protección alimentaria alcanza también a los miembros de otros grupos vulnerables, por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), le garantiza servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y asegurándole una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Así lo establece en el artículo 12 que indica:

Artículo 12.

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

En relación al derecho de alimento la Ley General de Pensión Alimenticia expresa que los alimentos constituyen una prestación económica que debe guardar la debida relación entre los ingresos o las posibilidades económicas de los que están obligados a darlos y de las necesidades de quién o quiénes los requieran.

Expresa la norma que los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustancias nutritivas y comestibles, atención médica y medicamentos, vestuario, habitación y servicios básicos, educación, movilización y recreación. Además comprenderán, si se trata de personas menores de edad, todo lo necesario para lograr su desarrollo integral desde la concepción y, si se trata de personas con discapacidad, todas las ayudas terapéuticas que su condición demanda.

Respecto del derecho a alimentos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha expresado que “es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La obligación alimentaria está entonces en cabeza de la persona que, por mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos”. (Confrontar con las Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana C-156/03, C-1033/02. C-919/02).

Efectuado el análisis respecto a qué se entiende por derecho de alimento, pasamos a verificar si la frase “apremio corporal por el término de treinta días”, contenida en el artículo 31 de la Ley N° 42 de agosto de 2012, vulnera o no el Artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Advierte el Pleno que el argumento medular por el licenciado Félix Humberto Paz para solicitar la inconstitucionalidad de la frase “apremio corporal hasta por un término de treinta días”, es el hecho que nuestro ordenamiento constitucional señala que no hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles, por consiguiente el alimentista tiene la posibilidad de presentar una medida cautelar de secuestro en contra de los bienes del alimentante y, posteriormente pueda instaurar un proceso ejecutivo a fin de cobrar los montos adeudados.

Sobre este argumento debe este Tribunal Constitucional señalar que la deuda alimentaria no es en sí misma una deuda civil, ya que a pesar de ser una obligación patrimonial, le alcanzan características propias de la materia alimentaria, distintas a las obligaciones meramente patrimoniales comunes, las cuales tienen su base en los contratos o fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación de dar alimentos se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, obligación dentro de la cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos necesarios para el desarrollo integral de las personas menores de edad o la subsistencia de los acreedores de alimentos.

Advierte esta Superioridad que el derecho de alimento es un derecho de orden público, ya que es de obligatorio cumplimiento para asegurar el orden público y así está recogido en la legislación nacional, por cuanto el artículo 2 de la Ley 42 del 7 de agosto de 2012, señala que “las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y se aplicarán con preferencia de otras leyes”.

Aunado a lo anterior el derecho de alimento encuentra sustento en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos suscritos por el Estado Panameño.

Al respecto el artículo 56 de la Constitución Política de la República de Panamá señala:

Artículo 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y prevención social. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos.

Del precepto constitucional transcrito la jurisprudencia reconoce que el fundamento constitucional del derecho a los alimentos, es el interés superior del niño y la protección especial de la familia en el ordenamiento jurídico, pero que dicha normativa era insuficiente en la protección que le debía brindar a los menores, por lo que se incorpora a la normativa constitucional el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño.

En este sentido mediante resolución de 19 de junio de 2012, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia al resolver la Advertencia de Inconstitucionalidad, contra la frase "con prevalencia del interés superior del menor" contenida en el artículo 763 del Código de la Familia, por estimarlo violatorio del artículo 56 de la Constitución Política de la República, señaló:

"En efecto, mediante Sentencia de 20 de marzo de 1996, el Pleno se ocupó de la situación del menor, en el contexto del Código de la Familia y la Carta Política, estimando que el texto del artículo 52 de la Constitución, hoy artículo 56 de la Carta Política, era insuficiente en la protección que le debía brindar, incorporando a la normativa constitucional el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en esa ocasión la Corte señaló:

Sobre este punto el Pleno después de estudiar el caso estima que la protección constitucional de los derechos de los menores; los cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, en nuestra Carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.

La lectura de la Sentencia transcrita pone de manifiesto que la interpretación del artículo 56 de la Constitución Política ha de hacerse en el contexto que ofrece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, como un complemento del texto constitucional, por lo que el interés superior del menor

es parte de la forma en que se aplica la protección que ofrece el artículo 56 constitucional."

Con fundamento en las normas antes citadas así como en los tratados de derechos humanos y en la jurisprudencia sostenida por este Tribunal Constitucional, debemos señalar que el constituyente como el legislador patrio han establecido para la familia una especial protección, lo que se traduce entre otros, que la deuda alimentaria se sustrae de los conceptos normativos comunes, para recibir una protección especial, pues dentro de ella se encuentra inmerso el cúmulo de derechos fundamentales que tiene todo ser humano al desarrollo integral, de ahí que los institutos aplicables a dicha figura sean los derivados de su carácter de derecho fundamental y no los relacionados con las deudas civiles.

Dicho lo anterior y en base a ese carácter de derecho fundamental que se le ha otorgado al derecho de alimento, la Ley 42 del 7 de agosto de 2012, en su artículo 4, que hace referencia a la naturaleza del derecho de alimento, expresa de manera categórica que, "el reclamo de las cuotas alimenticias atrasadas no constituye deuda civil".

Si bien la argumentación expuesta por el licenciado Félix Paz Moreno para sustentar la presente acción constitucional es que el artículo 21 de la Constitución Nacional expresa taxativamente que no hay prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles, este Tribunal Constitucional debe señalar que el artículo 4 de nuestra Carta Magna expresa que "la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional"; por su parte el último párrafo del artículo 17 de la norma fundamental expresa que "los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona".

En este sentido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe traer a colación lo preceptuado en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada mediante Ley N° 15 de 28 de octubre de 1977, que textualmente dispone:

"Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios".

Debe expresar el Tribunal Constitucional que el artículo 7.7 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene rango constitucional en atención a que la Convención Americana de los Derechos Humanos forma parte del Bloque de Constitucionalidad.

Sobre este punto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 19 de marzo de 1993 señaló:

"La constitucionalización de los derechos humanos se hizo efectiva, al incorporarse el segundo párrafo al artículo 17 de la Constitución Política, el cual señala que los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que guarden relación con derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Esta adición al artículo 17 citado, debe entenderse como una alusión directa a la tutela de los derechos humanos. Se consolidó de esta manera, lo que se conoce como la constitucionalización de la internacionalización de los derechos humanos, cuya génesis en Panamá se encuentra en la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Habida cuenta de la constitucionalización de los derechos humanos internacionales, debe considerarse la incorporación de otros Convenios internacionales sobre derechos humanos, en adición a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), tales como: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada mediante Ley No. 32 de 5 de diciembre de 1949; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, aprobada mediante Ley No. 49 de 2 de febrero de 1967; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley No. 14 de 28 de octubre de 1976; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1976; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra y de los Crimenes de Lesa Humanidad, aprobada mediante Ley No. 56 de 20 de diciembre de 2006; Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, aprobada mediante Ley No. 8 de 26 de octubre de 1976; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada mediante Ley No. 4 de 22 de mayo de 1981; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, aprobada mediante Ley No. 5 de 16 de junio de 1987; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada mediante Ley No. 12 de 18 de junio de 1991; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Protocolo de San Salvador), aprobado mediante Ley No. 21 de 22 de octubre de 1992; Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante Ley No. 15 de 6 de noviembre de 1990; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos dirigido a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado mediante Ley No. 23 de 17 de noviembre de 1992; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado mediante Ley No. 13 de 18 de junio de 1991; Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, aprobado mediante Ley No. 27 de 13 de diciembre de 1993; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobado mediante Ley No. 32 de 28 de junio de 1995; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), aprobada mediante Ley No. 12 de 20 de abril de 1995; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, aprobada mediante Ley No. 3 de 10 de enero de 2001;

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobado mediante Ley No. 17 de 28 de marzo de 2001; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, aprobado mediante Ley No. 47 de 13 de diciembre de 2000; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, aprobado mediante Ley No. 48 de 13 de diciembre de 2000; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado mediante Ley No. 25 de 10 de julio de 2007.

El anterior criterio fue reiterado mediante Sentencia de fecha 21 de agosto de 2008, mediante la cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, indicó:

"En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionados.

Por ello, un sistema de protección judicial de derechos fundamentales que no sea capaz de tutelarlos efectivamente, hace ilusorios tales derechos y está lejos de contribuir a la consolidación y preservación de un verdadero Estado de Derecho.

Finalmente, es importante señalar que los derechos fundamentales tutelables a través de un amparo pueden estar reconocidos en la Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá o en la ley, tal y como sabiamente lo establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"

Del análisis del artículo 7.7. de la Convención Americana de Derechos Humanos se advierte como regla general, el rechazo de la prisión por deudas, lo cual constituye un derecho humano, aclarándose que la excepción a esta regla general, precisamente son las deudas derivadas del incumplimiento de deberes alimentarios.

Se observa así que aún las normas internacionales en materia de derechos humanos permiten la privación de la libertad por deudas derivadas del incumplimiento de deberes alimentarios.

En el caso en estudio esta privación de libertad se traduce en el apremio corporal, el cual es visto por nuestro legislador como una medida restrictiva de libertad y no privativa de la misma, ya que no impide al deudor de alimento recuperar su libertad una vez cumple con su obligación alimentaria. Siendo el apremio corporal diferente a la detención, tanto en intensidad (restrictiva y no privativa) como en finalidad, puesto que el apremio corporal no tendría una finalidad punitiva como la detención o la prisión, sino que tiende a conminar el cumplimiento de una obligación de carácter legal, elevada a derecho fundamental, el atraso en el pago de la pensión alimenticia.

Debe advertir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ya esta Máxima Corporación de Justicia, con anterioridad ha señalado que, en ningún proceso de alimentos se asemeja como deuda civil **la obligación de suministrar alimentos, para los efectos que en caso de incumplir con dicha obligación se decrete el apremio corporal.**

En este sentido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 9 de septiembre de 1995, al resolver Consulta de inconstitucionalidad formulada por el Licenciado Giovany A. Fletcher dentro del proceso de alimento presentado por la señora Felicia Catuy de Ávila contra Arnulfo Ávila, afirmó:

"...La Corte mediante sentencia de 24 de mayo de 1991 en la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma de abogados "Trujillo Miranda y Asociados" (Registro Judicial, mayo de 1991, pág. 186 a 190), en relación con el citado artículo del Código Judicial expresó lo siguiente:


"Por último debe tenerse en cuenta que el legislador, en desarrollo del deber del Estado de garantizar a los menores el derecho a la alimentación, establecido en el artículo 52 de la Constitución Nacional, determinó en el artículo 1333 del Código Judicial, **que no se considerará como deuda la obligación de dar alimentos, para los efectos del apremio corporal, en los procesos de alimento**, lo que hace coincidir armónicamente el artículo 52 de la Carta Magna con el artículo 1333 del Código Judicial y por ende con el artículo 213 del Código Penal, **garantizando en forma efectiva el derecho de los menores a recibir alimentos, que no puede considerarse una obligación civil**, sino una obligación vital garantizada por la Constitución, la ley penal y procesal.

En base a los razonamientos anteriores, y dado que la frase impugnada no violenta la norma señalada como infringida, ni ninguna otra de nuestra Carta Fundamental, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la misma debe ser declarada constitucional y así procede a decidirlo.

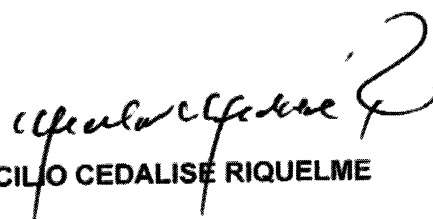
PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- PLENO, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONALIDAD la frase "apremio corporal por el término de treinta días", contenida en el artículo 31 de la Ley 42 del 7 de agosto de 2012, publicada mediante Gaceta Oficial N° 27095 del 8 de agosto de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANGELA RUSSO DE CEDEÑO


JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS


CECILIO CEDALISE RIQUELME


SECUNDINO MENDIETA



HARRY A. DÍAZ


JERÓNIMO MEJÍA E.


LUIS R. FÁBREGA S.

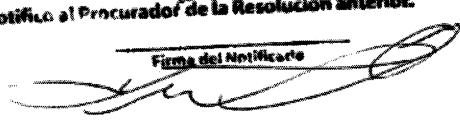

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

OYDÉN ORTEGA DURÁN


YANIXSA Y YUEN
SECRETARÍA GENERAL

Entrada: 309-18

SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En Panamá a los 9 días del mes de mayo
de 20 19 a las 2:00 de la tarde
Notifico al Procurador de la Resolución anterior.


Firma del Notificante